

Una ley llamada Davis-Bacon... Una ley que edifica nuestra clase media

No es el tipo de tema que surja a la hora de la cena, pero es lo que ayuda a que la cena sea servida. La Ley Davis-Bacon de los Estados Unidos, promulgada en 1931, es una política genuina y comprobada que evita que los proyectos de construcción financiados por el gobierno federal contribuyan a disminuir los salarios locales.

- Gracias a la Ley Davis-Bacon, el salario prevalente se determina en las comunidades locales en función de la economía existente y las tasas salariales locales. El salario prevalente rara vez es mejor que lo que ganan los miembros de LIUNA y otros obreros sindicales, pero sí permite evitar que los proyectos financiados por el gobierno federal reduzcan los salarios —o que los inflen artificialmente.
- La ley protege a las comunidades y a los empleadores al evitar que las normas salariales de zonas en las que los salarios son bajos se apliquen a zonas en las que los salarios son altos, y viceversa. La ley protege a las zonas rurales y a las zonas urbanas, y a todos los obreros, pertenezcan o no a un sindicato.

Por generaciones la Ley Davis-Bacon ha protegido a los contribuyentes y a los obreros de contratistas que tratan de competir ofreciendo salarios más bajos.

- La Ley Davis-Bacon no sólo ayuda a los obreros que construyen nuestro país para que puedan mantener a sus familias —también se asegura que los contribuyentes reciban un beneficio acorde a los impuestos que pagan. Al evitar que se adjudiquen obras públicas a contratistas que presentan licitaciones baratas que menoscaban los salarios de los obreros, la ley exige a los mejores contratistas a realizar las obras públicas y a competir en función de la calidad.
- Numerosos estudios demuestran que los proyectos construidos al amparo de las disposiciones laborales contempladas en la Ley Davis-Bacon tienen más probabilidades de ser concluidos a tiempo, evitando de esta manera demoras costosas. Los proyectos construidos al amparo de la Ley Davis-Bacon tienen más probabilidades de concluirse dentro del presupuesto previsto, incurriendo en menos costos futuros por concepto de reparaciones. Asimismo, los estudios indican que los obreros son más productivos cuando tienen mejor capacitación y más experiencia, cualidades que atraen los proyectos emprendidos bajo la Ley Davis-Bacon.

Si bien algunos políticos y grupos del gremio han tratado de acabar con las protecciones que confiere la Ley Davis-Bacon, son una minoría y no tienen posibilidades de ganar.

- A lo largo de su larga trayectoria, ha habido muchos intentos por acabar con las disposiciones favorables al bienestar familiar que contempla la Ley Davis-Bacon. Típicamente esos ataques han sido propiciados por grupos empresariales empeñados en reducir los salarios por debajo de las normas de la comunidad para aumentar sus utilidades a expensas de los obreros que construyen esos proyectos, los contribuyentes que los financian, y las comunidades que dependen de ellos.
- Sin embargo, la mayoría de los funcionarios democráticamente elegidos —entre ellos Republicanos, Demócratas e Independientes— así como muchas asociaciones gremiales, apoyan los beneficios que confiere la ley. Tras iniciativas encabezadas por LIUNA, las disposiciones de la Ley Davis-Bacon en pro del bienestar familiar se han hecho cumplir en importantes proyectos financiados recientemente por el gobierno federal, lo cual incluye casi US\$286.000 millones en financiamiento vial y la reconfirmación, por parte de la Cámara de Representante de los Estados Unidos, de la Ley sobre Agua Potable. Si bien el Presidente Bush trató de impedir que las protecciones que confiere la ley les fueran dadas a las comunidades de la Costa del Golfo tras los efectos del Huracán Katrina, una coalición bipartidista lo obligó a ceder en su empeño.